



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 14-33 Piso 6°
cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

RADICADO: 110014003009-2022-00236-00

Bogotá, primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022)

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992

Demandante: **YEIMY ELVIRA TOVAR SALAZAR**

Demandado: **CONJUNTO CERRADO CONDADOS DE LA SABANA III**, su representante legal **NIYIRET TATIANA PÁEZ HERNÁNDEZ** y el **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Providencia: Fallo

ASUNTO

Procede este Despacho a resolver la acción de tutela propuesta por **YEIMY ELVIRA TOVAR SALAZAR**, quien actúa a través de apoderado judicial en contra del **CONJUNTO CERRADO CONDADOS DE LA SABANA III**, su representante legal **NIYIRET TATIANA PÁEZ HERNÁNDEZ** y el **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, con motivo de la supuesta violación a los derechos fundamentales a la petición, artículo 23 Constitución Política de Colombia, radicado día 24 de enero de 2022.

ANTECEDENTES

Relata la parte actora que el 24 de enero de 2022 radicó peticiones al Conjunto Condados de la Sabana III P.H., a través de correo electrónico dirigido a la dirección condadosdelasabanaiiii@gmail.com, que es la indicada por la administración en los diferentes comunicados a la comunidad. Agregó que no ha recibido respuesta alguna.

Señaló que no se ha celebrado asambleas ordinarias y/o extraordinarias de copropietarios, por los años de ejercicio de 2019, 2020 y 2021, y que sólo hasta el 05 de febrero de 2022, la representante legal del conjunto, envió convocatoria a los copropietarios, mediante comunicación escrita dejada en los casilleros, en la que se fija como fecha para celebración de la misma, el 27 de marzo de 2022, no enviaron el listado de morosos ni las dos propuestas de presupuesto indicadas en la convocatoria. Además, no se indicó el lugar donde se va a celebrar la reunión.

ACTUACIÓN PROCESAL

Se admitió la tutela. Se negó la medida provisional invocada.

La accionada no se pronunció ante los hechos.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.

De conformidad con los hechos esbozados anteriormente, este Despacho entra a determinar si la entidad demandada desconoce los derechos fundamentales a la petición, ante la negativa de brindarle una respuesta a su pedimento radicado día 24 de enero de 2022.

2. Marco jurídico de la decisión.

2.1. La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de un particular, que preste “un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado subordinación o indefensión” (Ib.), y no se cuente con otro mecanismo judicial para su salvaguarda.

Por esta razón, la finalidad última de esta acción constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que se configure la amenaza que sobre él se cierne.

2.2. El derecho fundamental de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual reza:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

En desarrollo de esa garantía, la ley 1755 del 30 de junio de 2015 establece reglas para el ejercicio del derecho de petición que deben observarse por la administración y todas las personas que hagan uso de ese mecanismo. Mediante esta ley el Legislativo introdujo importantes modificaciones a los artículos 13 a 33 de la primera parte de la ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, el artículo 14° de la ley 1755 de 2015 estatuye: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.

Es claro anotar para lo presente en el caso, que la ley mencionada requiere bajo su objeto que las personas tienen derecho “a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. Por lo cual, respuestas de forma indebida y que carezcan de formalidades y fundamentos no pueden considerarse como satisfecha las solicitudes del peticionario.

Al referirse a este derecho, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterada en el sentido de señalar que no se agota y cumple con “cualquier respuesta”, sino que la respuesta debe ser clara, oportuna, concreta y de fondo de manera que siendo la decisión positiva o negativa a lo solicitado, definitiva el asunto objeto de la petición.

En Sentencia T-831A/13 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la respuesta a los derechos de petición puede ser favorable o no para el peticionario, y en todo caso (i) debe ser reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en conexidad con la garantía de otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma oportuna, esto es, dentro del término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una respuesta de fondo respecto de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y congruente; (iv) como ya se indicó en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al peticionario; y (v) se aplica por regla general a entidades públicas pero también a organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

Por tanto, puede concluirse que el derecho de petición tiene un “núcleo fundamental ” [que] está constituido por: i) el derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa y, ii) la pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada esta garantía si la administración omite su deber constitucional de dar solución oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración” (T-237 de 2016).

Ahora bien, el Decreto 491 del 28 de marzo de 2.020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y

los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en su artículo 5 estableció:

“Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

2.3. El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, estipula la presunción de veracidad sobre los hechos de una acción de tutela en los casos que no se rinda el informe requerido:

“Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”

3. Hechos relevantes probados.

En lo medular, la presente acción plantea un inconformismo de **YEIMY ELVIRA TOVAR SALAZAR** al no brindársele una respuesta a su pedimento del 24 de enero de 2022 remitido mediante correo electrónico a la entidad accionada, **CONJUNTO CERRADO CONDADOS DE LA SABANA III**, mediante el cual solicitó copias de:

1. Certificado de existencia y representación legal del conjunto, durante el periodo 2010 a 2022.
2. Contrato celebrado con los diferentes administradores, durante el periodo 2010 a 2022,
3. Contrato celebrado con las personas encargadas del mantenimiento de zonas comunes del conjunto (todero), durante el periodo 2010 a 2022,
4. Contrato celebrado con las personas encargadas de los servicios generales de zonas comunes del conjunto (Aseo), durante el periodo 2010 a 2022,
5. Contrato firmado con la(s) empresas o personas naturales encargadas de la Revisoría fiscal del conjunto durante el periodo 2010 a 2022,
6. Contrato firmado con la(s) empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, durante el periodo 2010 a 2022,
7. Contrato firmado con la(s) empresas o personas naturales encargadas de la ontabilidad del conjunto durante el periodo 2010 a 2022,
8. Estados financieros del periodo 2010 a 2022,
9. Balances del periodo 2010 a 2022,
10. Conciliaciones bancarias del periodo 2010 a 2022

11. Contrato firmado con la(s) empresas o personas naturales encargadas de la recuperación de cartera morosa del conjunto, durante el periodo 2010 a 2022,
12. Informes de gestión del servicio de recuperación de cartera durante el periodo 2010 a 2022,
13. Actas de Asambleas ordinarias y extraordinarias del conjunto, durante el periodo 2010 a 2022,
14. Actas de consejo de administración, del periodo 2018 a 2022,
15. Cotizaciones reunidas para la realización de la fuente ubicada en la zona comunal donde estaba el parque infantil,
16. Acta que autorizó la obra indicada en numeral anterior,
17. Extractos bancarios de la cuenta de recaudo del conjunto, correspondientes al periodo entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de enero de 2022.

4. Análisis del caso.

El inconformismo de la parte demandante deviene, en que la demandante hasta la fecha de la presentación de la acción no ha recibido respuesta a su solicitud de fecha 24 de enero de 2022.

Ahora bien, la entidad accionada guardó silencio, por lo que se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1.991, es decir, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la tutelante, con la consecuencia relevante de tener por cierto el hecho afirmado en la demanda sobre la ausencia de una respuesta de forma real, concreta y material de la entidad accionada respecto a lo solicitado.

Recuérdese que la jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”. (C. Const. Sent. T – 206/18).

Así las cosas, frente al incumplimiento por parte del **CONJUNTO CERRADO CONDADOS DE LA SABANA III**, se concederá el amparo suplicado, para que le entregue una respuesta clara, congruente y consecuente a la petición elevada por la accionante el 24 de enero de 2.022.

5. En cuanto a la solicitud de -subsana la convocatoria a Asamblea General de copropietarios para el año 2022, adjuntando listado de deudores morosos de cada periodo de ejercicio, así como estados financieros, propuestas de presupuestos e indicando en debida forma fecha, hora y lugar en donde se desarrollará la reunión de Asamblea de Copropietarios- debe indicarse que, pretender la solución del litigio por la vía constitucional, es desconocer el desarrollo jurisprudencial en torno al carácter subsidiario de la acción de tutela, pues no aparece demostrado en el proceso, que exista un perjuicio irremediable que amerite una decisión inmediata.

Recuérdese, que la acción de tutela no es el medio idóneo para obtener la satisfacción de sus pretensiones, por tanto en términos de subsidiariedad esta petición no está llamada a prosperar.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de **YEIMY ELVIRA TOVAR SALAZAR**, por lo arriba expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior, al **CONJUNTO CERRADO CONDADOS DE LA SABANA III**, a través de su representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta determinación, le entregue una respuesta clara, congruente y consecuente a la petición elevada por el accionante el 24 de enero de 2.022

TERCERO: Negar la pretensión de subsanar la convocatoria a Asamblea General de copropietarios para el año 2022, adjuntando listado de deudores morosos de cada periodo de ejercicio, así como estados financieros, propuestas de presupuestos e indicando en debida forma fecha, hora y lugar en donde se desarrollará la reunión de Asamblea de Copropietarios, por lo arriba expuesto.

CUARTO Notificar a las partes la presente decisión. Ordenar que por secretaría se libren las comunicaciones de ley.

QUINTO: Remitir este fallo si no fuere impugnado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Luz Dary Hernández Guayambuco'.

LUZ DARY HERNÁNDEZ GUAYAMBUCO